

JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., seis de febrero de dos mil veinticuatro

Ref. Tutela
Rad. : 110014189018 -2023-01928-01
De: Nelson David Villamil Rada
Contra: Lucíola Pérez de Almedia
se vincula a Club del Comercio De Bogotá

Corresponde a Despacho resolver la impugnación presentada por el señor Nelson David Villamil Rada frente al fallo proferido por el Juzgado Dieciocho de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad, dentro de la acción de tutela de la referencia.

Informó la accionante que delante de sus compañeros German Valencia (Director del Area) y Esteban Osorio (Caddie Máster) preguntó a la socia Lucíola Pérez de Almedia que se tomaba dicho turno, perdería el de las 6:30 pm, igualmente indicó que la señora Lucíola, envió comunicación al Comité Deportivo en la que manifestaba la preocupación por las reiteradas actuaciones deshonestas del accionado.

Mediante auto del 1° de diciembre de 2023 el juez de primer grado avocó el conocimiento de la presente acción de tutela, ordenó correr traslado y vinculó al Club Comercio de Bogotá (cons. 007).

CONSIDERACIONES

Aunque sería del caso entrar a decidir de fondo, se observa causal de nulidad que afecta la actuación surtida en primera instancia, en punto a que no se encuentra debidamente integrado el contradictorio de la presente acción.

En diversas ocasiones la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha estimado que la informalidad de que está revestido el trámite de tutela no puede implicar el quebrantamiento del debido proceso a que por expreso mandato constitucional están sometidas las actuaciones administrativas y judiciales (art. 29 C.P.)¹, y en cuyo contenido constitucionalmente protegido se incorporan los derechos de defensa y contradicción.

La Corte Constitucional ha sostenido que en el trámite de tutela debe garantizarse el debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción no solo de aquellos contra quienes se dirige la demanda, sino también de quienes pueden verse afectados con la decisión, de allí surge entonces su interés para intervenir y, por ende, se deben vincular de forma oficiosa, por si es su deseo ejerzan los derechos en mención, y no se vean sorprendidos. Es lo que se conoce como una debida conformación del contradictorio.

¹ Corte Constitucional, Auto 021 de 2000.

De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté obligado –entre otras cargas – a integrar debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jurídico.

En tal sentido debe recordarse el contenido del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, el cual reza de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCIÓN E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En armonía con lo anterior, en el Auto 025A/12, expresó el Tribunal que:

“(…) aun cuando el trámite de la acción de tutela se caracteriza por ser breve, sumario e informal, ese proceso constitucional no puede desarrollarse sin la participación de la autoridad pública o del particular contra quien se dirige la acción, y tampoco sin la presencia de los terceros que tengan un interés legítimo en el mismo, pues es imposible conceder o negar la protección constitucional a quien no está legitimado por activa, y tampoco pueden emitirse órdenes vinculantes en contra de quien no está legitimado por pasiva. En el Auto 028 de 1997, la Corte hizo claridad sobre el punto al sostener que

“Ser oído en el proceso de tutela es derecho fundamental de rango constitucional que asiste no solamente a quien aparece como demandado, tanto si es un funcionario o entidad estatal como si se trata de un particular, sino a quien, sin ser parte, puede resultar afectado por la decisión que se adopte como culminación del especialísimo trámite consagrado en el artículo 86 de la Constitución (Negrillas y subrayas fuera de texto).”

El Juez constitucional, como garante de los derechos fundamentales, en su afán de protección asignada desde la Constitución, no puede apartarse, en ningún momento, de los elementos integradores del debido proceso, enmarcado en el derecho a la defensa. No puede existir vacilación para aplicar los procedimientos legales tendientes a indagar la realidad que presenta un determinado caso de tutela. De esa manera, se deberá llamar a todas las personas o autoridades públicas que puedan resultar implicadas y, por ende, resulten afectadas o comprometidas con la providencia.

Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la falta de notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación al proceso, generan una irregularidad que vulnera el debido proceso. Al respecto, la Corte Constitucional señaló en Auto 234 de 2006 lo siguiente:

“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta u omisión de la notificación de las decisiones proferidas en un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. De allí que por ejemplo la falta de notificación de la providencia de admisión de una acción de tutela, no permite que quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse de la existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación de una decisión judicial sin haber sido oído previamente. Cuando la situación anotada se presenta, se dan los fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita la configuración en debida forma del contradictorio, o se vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues sólo de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de la demanda y la posibilidad del ejercicio del

derecho al debido proceso y defensa, así como la emisión de un pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los derechos fundamentales invocados”.

En el caso *sub examine*, el Despacho observa que en el escrito de tutela el accionante manifestó que que delante de sus compañeros German Valencia (Director del Area) y Esteban Osorio (Caddie Máster) preguntó a la socia Lucíola Pérez de Almedia que se tomaba dicho turno, perdería el de las 6:30 pm, igualmente indicó que la señora Lucíola, envió comunicación al Comité Deportivo en la que manifestaba la preocupación por las reiteradas actuaciones deshonestas del accionado, y es lo que trae ahora el estudio de esta impugnación la discusión del apelante frente a este punto.

Si bien el mecanismo de tutela originalmente se dirigió en contra a Lucíola Pérez De Almeida y se vinculó al Club del Comercio de Bogotá; se debió igualmente vincular al Comité Deportivo del Club, y de manera importante debió llamarse a testimoniar a los señores German Valencia (Director del Area) y Esteban Osorio (Caddie Máster) sobre los hechos que son origen de la tutela.

Como consecuencia de lo expuesto, se declarará la nulidad a partir del fallo dictado el 14 de noviembre de 2023, a efectos de que el juez de primer grado proceda a vincular a la presente acción al Comité Deportivo del Club del Comercio de Bogotá, e igualmente llamar a testimonio a los señores German Valencia (Director del Área) y Esteban Osorio (Caddie Máster), con el fin de garantizar los derechos de contradicción y de defensa dentro de este trámite, toda vez que su actuación puede tener injerencia ante la eventual afectación de los derechos invocados.

Lo anterior, no afecta la validez de la prueba practicada durante el trámite de tutela.

Por lo expuesto, El **JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ,**

RESUELVE

Primero: **DECLARAR LA NULIDAD** de lo actuado dentro de este trámite de tutela adelantado por el Juzgado 18 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad a partir del fallo calendado el 14 de noviembre de 2023, a efectos de que se proceda a vincular al Comité Deportivo del Club del Comercio de Bogotá, e igualmente llamar a testimonio a los señores German Valencia (Director del Área) y Esteban Osorio (Caddie Máster, conforme lo anotado.

Segundo: Notificar a las partes la presente providencia.

Tercero: **DEVOLVER** la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la irregularidad advertida.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez

MARIA EUGLENIA FAJARDO CASALLAS

Firmado Por:
Maria Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 027 Escritural
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e0bc75d38191576b53497db4cb4415752c85c71bcf8ae2c5df7a4e96069dfa2b**

Documento generado en 06/02/2024 08:04:09 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>